

PERÚ: ELECCIONES ENTRE 1992 Y 1996

Fernando Rospigliosi

I. INTRODUCCIÓN

Entre 1992 y 1995 se efectuaron 5 procesos electorales en el Perú. Si la democracia se midiera por la cantidad de elecciones realizadas, Perú sería uno de los países más democráticos de América Latina. Pero se requiere más que eso para consolidar un proceso democrático.

Las elecciones en este período fueron las siguientes:

- 1) 22 de noviembre de 1992, Congreso Constituyente Democrático.
- 2) 29 de enero de 1993, Municipales.
- 3) 31 de octubre de 1993, Referéndum constitucional.
- 4) 9 de abril de 1995, Presidenciales y Congreso.
- 5) 12 de noviembre de 1995, Municipales.

II. ELECCIONES PARA EL CONGRESO CONSTITUYENTE: NOVIEMBRE DE 1992

El 22 de noviembre de 1992 se realizaron en el Perú elecciones para elegir un "Congreso Constituyente Democrático". Esos comicios fueron consecuencia de las presiones internacionales ejercidas sobre el gobierno de facto de Alberto Fujimori, que el 5 de abril de ese año había dado un golpe de estado disolviendo el Parlamento, interviniendo el Poder Judicial, suspen-

diendo la vigencia de la Constitución y persiguiendo a sus adversarios políticos. Las intenciones iniciales de Fujimori fueron gobernar con poderes absolutos, sin parlamento y recurriendo a plebiscitos cada cierto tiempo.¹ Sin embargo, la condena que recibió de parte de la comunidad internacional, lo obligó a modificar parcialmente su esquema y convocar a elecciones para un Congreso Constituyente (al que agregó el calificativo de *democrático*).

En las elecciones, en las que no participaron los principales partidos políticos peruanos, triunfó la alianza oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90 (37.5%), en segundo lugar quedó el Partido Popular Cristiano (7.4%), y luego varias listas electorales de nuevos movimientos.

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

Las elecciones del 22 de noviembre no estaban previstas en el ordenamiento constitucional ni político peruano. Fueron una solución de compromiso para tratar de superar la crisis originada por el golpe del 5 de abril. Aunque, a decir verdad, en el Perú muy pocos querían esas elecciones. Los que las impusieron fueron gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Alberto Fujimori, convertido en dictador, no tenía en sus planes convocar a un Congreso, porque su intención era gobernar con poderes absolutos, sin dar cuenta a nadie y sin tener que discutir públicamente las leyes que promulgaba. A Fujimori parece estorbarle el Congreso, aún cuando tenga una mayoría que no lo contradice en nada. Pero se tuvo que someter a la presión internacional, porque todo su esquema económico –y en parte su estabilidad política– reposaba sobre las posibilidades de normalizar las relaciones con los organismos multilaterales, rotas durante el gobierno anterior.

La precaria situación de la economía peruana y el programa económico aplicado por el gobierno desde agosto de 1990, lo hacen extremadamente dependiente de las decisiones que puedan tomar los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y los gobiernos de los principales países industrializados. En particular, fue decisiva la conducta del gobierno de los Estados Unidos, cuya opinión es determinante en todas esas instituciones. Si bien las reuniones y resoluciones se tomaban en la Organización de

1 Ver Boletín Electoral Latinoamericano No. 7, CAPEL-IIDH.

Estados Americanos, al gobierno de Fujimori lo que importaba eran las presiones que podían ejercer el FMI, BM y BID.

A los partidos de oposición democrática no les convenía una elección en esas circunstancias, porque presumían que iban a ser derrotados. No sólo porque los comicios no contaban con garantías de imparcialidad, debido a la manipulación del gobierno de facto y porque se podía prever que el Congreso carecería de autonomía y poder real, sino porque su descrédito es muy profundo entre la población.

A la mayoría de la ciudadanía no le preocupaba mucho la elección de un nuevo Congreso. Precisamente el desprestigio de los partidos y de instituciones como el parlamento, permitió el triunfo de Fujimori en 1990 y el golpe del 5 de abril.² Eso se reflejó luego en el escaso interés en las elecciones.

Alberto Fujimori acudió sorpresivamente a una Asamblea de Cancilleres de la OEA celebrada en Nassau, Bahamas, que probablemente iba a condenar al régimen de facto, el 18 de mayo de 1992. Para impedir la censura y sus consecuencias, prometió realizar elecciones en un plazo máximo de 5 meses para un Congreso Constituyente con funciones legislativas y fiscalizadoras que, además, redactaría una nueva Constitución.

Las elecciones fueron convocadas para el 18 de octubre pero después, sin mediar explicación alguna, trasladadas al 22 de noviembre. A la vez las elecciones municipales, que habían sido convocadas –como correspondía– para el 8 de noviembre, fueron postergadas para marzo de 1993. Ante la protesta de los partidos políticos y presiones internacionales, el gobierno cambió nuevamente la fecha de las municipales al 7 de febrero y luego, otra vez, al 29 de enero de 1993.

Las elecciones para el CCD fueron convocadas oficialmente mediante el decreto ley No. 25684, dictado el 22 de agosto. Tres días después, el 25, el gobierno de facto promulgó otro decreto ley (Nro. 25686) modificando su propia ley electoral, y luego la volvió a cambiar el 1 de setiembre (DL No. 25701).

2 Aunque –contradictoriamente– algunas encuestas realizadas en diciembre de 1991 y otras en enero de 1993 indican que una gran mayoría desearía un control parlamentario sobre el gobierno (Julio Cotler, “Eficacia Autoritaria y Valores Democráticos”, en *Caretas*, 18.2.93).

En este ambiente de inseguridad, incertidumbre y cambios constantes se realizaron las elecciones. Además, Fujimori sostuvo explícitamente y en reiteradas oportunidades, que si el CCD no aprobaba lo que el que quería, lo disolvería y convocaría otro.³

El gobierno no respetó uno de los compromisos adquiridos en la Asamblea de la OEA de Bahamas, que implicaba la negociación en búsqueda de consensos para convocar las elecciones con reglas aceptables para todos. Algunas reuniones entre el Presidente del Consejo de Ministros y los partidos políticos fueron una maniobra de distracción, como se comprobó después, pues el gobierno ya tenía preparada su ley electoral, elaborada de acuerdo a sus particulares conveniencias y sin tomar en cuenta la opinión de los partidos.

El CCD, según la convocatoria, contaría sólo con 80 miembros, reunidos en una asamblea unicameral, electos por distrito nacional único y con doble voto preferencial.⁴ (El Parlamento peruano contaba con 240 miembros). Los únicos motivos argüidos para ese cambio fundamental fueron que un Congreso más pequeño sería más "eficiente" y "más barato". En realidad, las verdaderas razones eran que Fujimori no tenía muchas personas de su confianza para integrar una lista. Por eso también se instituyó el distrito único, dado que Fujimori carece de un partido político y, por tanto, no tiene candidatos confiables en provincias, y que un Congreso tan pequeño tendría menos posibilidades de realizar eficazmente las tareas de fiscalizar, legislar y redactar una Constitución, dejando un mayor margen de acción al gobierno.

La convocatoria, además, establecía que los actos del gobierno, desde el golpe del 5 de abril, no podrían ser modificados por el CCD (Título V, DL 25684), cuya soberanía quedaba de hecho limitada. Se prohibía la reelección de los congresistas por un período (Título V), limitándose también su autonomía al hacer depender el presupuesto del CCD del gobierno (art. 145) y al eliminarse la inmunidad parlamentaria (art. 143). También se modifica-

3 En una entrevista de TV le preguntaron "¿Qué podría pasar con ese Congreso si va contra las enmiendas principales que Ud. va a realizar a la Constitución?". La respuesta de Fujimori fue "La Constitución pues, sencillamente no sería aprobada y tendría que volver a reunirse un nuevo CCD." Citado en *Caretas*, 25.5.92, p. 13.

4 El elector vota por una lista y opcionalmente puede señalar hasta dos candidatos de esa lista. El número de curules se asigna a la lista de acuerdo a la "cifra repartidora" (método d'Hont). Los que ocupan esos curules, dentro de cada lista, son los que obtiene más votos preferenciales.

ron arbitrariamente las condiciones de inscripción, borrándose la de algunas agrupaciones que estaban vigentes según la ley anterior.

LISTAS Y CAMPAÑA ELECTORAL

Alberto Fujimori designó para encabezar la lista electoral oficialista a Jaime Yoshiyama Tanaka, un tecnócrata y empresario, que hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Energía y Minas y presidente de la Comisión de Privatización, encargada de vender las empresas públicas. Yoshiyama, al que no se reconocían muchas habilidades como candidato, es respetado entre los empresarios y se decía que era el principal aliado en el gabinete del ultraliberal ministro de Economía Carlos Boloña.

Fujimori decidió también crear un nuevo partido para esta ocasión, al que denominó Nueva Mayoría. Cambio 90, el grupo con el que ganó las elecciones de 1990, no existía para efectos prácticos. El propio Fujimori se encargó de destruirlo paulatinamente después de su triunfo electoral, separando a aquellos que no obedecían sus directivas. En diversos momentos desde junio de 1990, fueron expulsados o renunciaron muchos dirigentes, incluyendo al Secretario General y los dos vicepresidentes de la república, así como un tercio de los parlamentarios. Demás está decir que Fujimori jamás consultó nunca sus decisiones con Cambio 90, que simplemente quedó como un rótulo, una etiqueta, que convencionalmente se aplicaba a los allegados del presidente.

Para las elecciones del Congreso Constituyente Democrático (CCD) Fujimori decidió terminar definitivamente con Cambio 90, inventando a Nueva Mayoría. Pero encontró una dificultad. Las encuestas revelaron que la opinión pública seguía identificando a Cambio 90 como el partido de Fujimori. Introducir un nuevo nombre en el mercado electoral, en un tiempo tan corto como el que había hasta la realización de las elecciones, podía ocasionar confusión a sus seguidores. Por tanto, Fujimori decidió presentar su lista como una alianza electoral entre Nueva Mayoría y Cambio 90.

Pero aunque ambos grupos son inexistentes como partidos o movimientos políticos, hay que señalar que existe cierta rivalidad entre sus miembros, no en función de ideologías o planteamientos diferentes, sino por sus distintos orígenes y en función del acceso a posiciones de poder. Se puede decir, en términos generales, que los de Cambio 90 son los allegados tempranos de Fujimori, los que lo conocieron cuando era profesor y luego rector de la Universidad Agraria, y aquellos que participaron con él en la campaña electoral de 1990. Los de Nueva Mayoría son los adeptos tardíos, que se acercaron a él cuando ya estaba en el gobierno.

De los partidos políticos sólo el Popular Cristiano decidió intervenir, luego de una áspera discusión interna, en las que los "participacionistas" se impusieron a los "abstencionistas" en una proporción de 60% a 40%. También Solidaridad y Democracia (SODE), un pequeño movimiento integrado básicamente por tecnócratas, que hasta ese momento sólo había intervenido en alianzas en elecciones (con el APRA en 1985 y en FREDEMO en 1990).

El APRA, Acción Popular, Libertad, Izquierda Unida y otros partidos decidieron no participar denunciando las elecciones como manipuladas por el gobierno, aunque adelantando que sí intervendrían en los comicios municipales postergados hasta enero de 1993 (debieron ser en noviembre de 1992). Los partidos aducían que no había garantías de imparcialidad en el manejo del proceso, que la legislación electoral era arbitraria, que el Jurado Nacional de Elecciones -cuyo Presidente y Secretario General fueron cambiados por Fujimori después del 5 de abril- era espúreo.

Si bien todo lo anterior es cierto, también es verdad que los líderes políticos eran concientes de su debilidad. La razón por la que ellos sí se avenían a participar en las municipales, es que sabían que el oficialismo, al carecer de organización política, no podía presentar candidatos en los alrededor de 2,000 distritos electorales. Por tanto, allí la opción de los partidos aumentaba. Pero en los comicios para el CCD, con distrito electoral único, era muy probable que la lista oficialista triunfara. Los partidos democráticos, entonces, convalidarían con su presencia en el CCD la "legalización" del gobierno de facto, interna y externamente.

Los partidarios del gobierno acusaron a los partidos de "antidemocráticos" porque -en este caso- rehuían el veredicto de las urnas electorales. Pero en su descargo puede decirse que el arbitrario cambio de las reglas del juego, modificadas a su antojo por el Presidente convertido en dictador, dejaba poco margen para una competencia democrática que merezca el nombre de tal. Si Alan García hubiera disuelto el Congreso en 1986 ó 1987 -cuando contaba con índices de popularidad de 80% o 90%-, es probable que hubiese contado con un respaldo mayoritario. La democracia no puede funcionar ni ser estable si las reglas se cambian según el antojo, humor o cálculo del que tiene el poder en un momento dado.

En las condiciones descritas, la campaña electoral fue también peculiar. Además de muy breve, careció de grandes debates y de entusiasmo popular. El presidente de facto apoyó abierta y sistemáticamente al candidato oficialista. Constantemente recorrió zonas pobres, en compañía de Yoshiyama, repartiendo alimentos y donaciones internacionales recibidas por el

gobierno peruano, a pesar de que la utilización de recursos públicos en campañas electorales está explícitamente prohibida y penada por la ley.

Jaime Yoshiyama se negó sistemáticamente a debatir con otros candidatos e incluso a conceder entrevistas a la prensa.

Pero, quizás lo más importante, fue la actitud de las FF.AA. En ese momento en el Perú las FF.AA. jugaban un papel fundamental en la organización de las elecciones, no sólo en la custodia del proceso electoral -amenazado por organizaciones terroristas-, sino en el desarrollo del mismo y, en oportunidades, en la confirmación de los resultados.⁵ La debilidad del Jurado Nacional de Elecciones, contribuía a esta situación. El asunto es que hasta ese momento las FF.AA. habían sido imparciales en los procesos electorales. Pero en esa oportunidad, los mandos militares habían expresado su pública adhesión al gobierno de Alberto Fujimori. Denuncias sobre la intervención de militares en la campaña a favor de los candidatos oficialistas nunca fueron investigadas ni por el JNE ni por la Fiscalía de Nación.

Por primera vez en la historia reciente del país, una elección se realizó sin que los principales contendientes realizaran manifestaciones al final de la campaña. Y no lo hicieron porque eran conscientes de la apatía de la ciudadanía respecto al proceso.

Un suceso que influyó mucho en los resultados electorales fue la detención de Abimael Guzmán y los principales dirigentes de Sendero Luminoso el 12 de setiembre de 1992. La captura fue efectuada por el Gein (Grupo Especial de Inteligencia), organismo especializado de la Dincote (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) de la policía. El Gein venía realizando un paciente seguimiento de la cúpula terrorista desde 1990 y actuaba de manera independiente de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Los oficiales policiales que dirigían el Gein no informaron de sus avances al SIN. Por eso cuando Guzmán y sus secuaces fueron capturados, nadie en el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo. Alberto Fujimori pescaba con su hijo en un remoto lago amazónico. El ministro del Interior, un general del ejército en actividad, asistía a una fiesta en la embajada británica. Y el jefe real del SIN, Vladimiro Montesinos, veía televisión. Cuando se enteraron de la captura de Guzmán, trataron de arrebatarlo a la policía y llevarlo a una dependencia militar,

5 Una copia de las actas de votación corresponde a las FF.AA. No son raras las oportunidades en que el JNE tiene que recurrir a esas actas, pues las suyas se perdieron o deterioraron o fueron impugnadas.

pero el jefe de la Dincote filtró la noticia a los medios de prensa que se agolparon en la dependencia policial. Así, Guzmán quedó en poder de la Dincote como manda la ley, hasta ser entregado a un tribunal militar. Lo que estaba en juego realmente era a quien se atribuían los laureles de la victoria decisiva sobre Sendero Luminoso. Alberto Fujimori, que sostenía en público que él personalmente dirigía la lucha antiterrorista, probablemente hubiera querido ser quien diera la noticia y aparecer como el directo gestor del triunfo, pero no lo pudo hacer. A fin de año, los jefes de la Dincote y el Gein, artífices de la captura de Abimael Guzmán, fueron cambiados de colocación y enviados a otras dependencias.

Pero estos son detalles que el gran público no conocía. El hecho era que se había desarticulado a la dirección de la feroz organización terrorista, en el peor momento de su ofensiva sobre Lima y otras ciudades. La sensación de alivio de la población y la certeza que con la captura del hasta entonces mítico e inubicable Guzmán la guerra interna que había cobrado 25,000 vidas llegaría a su fin, se fue extendiendo en la ciudadanía, dos meses antes de las elecciones. Fue, sin duda, un factor importantísimo en la campaña.

El 13 de noviembre de 1992, 9 días antes de los comicios, se produjo un intento de golpe militar, encabezado por varios generales del ejército en retiro. Los jefes del golpe cancelaron el movimiento a último momento, porque estimaron que no estaba lo suficientemente preparado, pero la información se filtró y sus dirigentes fueron detenidos. Alberto Fujimori, cuando se enteró del intento, se refugió en la residencia del embajador del Japón y sólo salió cuando estuvo seguro que el movimiento había sido debelado. El objetivo declarado de los generales en retiro que dirigieron el intento era restituir la democracia, para lo cual estimaban que el golpe debería efectuarse antes de las elecciones del 22 de noviembre, que legitimaría a Fujimori. Al parecer habían establecido coordinaciones con políticos opositores al gobierno, y pensaban reemplazar a Fujimori con Máximo San Román, vicepresidente de la República electo en 1990, pero destituido por Fujimori porque no se plegó al golpe del 5 de abril. Aunque fracasó, el intento de golpe mostró las fisuras que se habían producido en las FF.AA. como consecuencia de la manipulación política que se efectuaba.

Estos hechos parece que también favorecieron electoralmente al gobierno, que presentó a la oposición como golpista y fracasada.

SIN PARTIDOS

En las elecciones intervinieron 18 grupos políticos, de los cuales 10 obtuvieron representación en el Congreso. La alianza Nueva Mayoría-

Cambio 90, fue encabezada por el exministro Jaime Yoshiyama Tanaka.⁶ Fujimori y Yoshiyama escogieron a los integrantes de la lista y decidieron sus ubicaciones. Nueva Mayoría-Cambio 90 carecen por completo de estructuras organizativas. No tienen dirigentes, no realizan eventos –Congresos, asambleas–, y ni siquiera cuentan con un local propio en todo el país. La lista electoral que presentaron fue elaborada por Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama y algunos de sus allegados. Los candidatos fueron reunidos antes del proceso electoral –y después los elegidos– para recibir instrucciones.

El único partido que intervino fue el Popular Cristiano (PPC), aunque sus principales dirigentes no postularon en la lista, algunos porque estaban en desacuerdo con la participación y otros porque no querían correr el riesgo de una derrota.

El resto fueron listas organizadas en torno a caudillos o grupos de personas que se juntaban con el exclusivo propósito de intervenir en los comicios, disolviéndose inmediatamente después de culminadas las elecciones. Si obtenían curules, sus congresistas por lo general no mantenían ninguna organicidad con su agrupación en el Parlamento. En este rubro tenemos al Frente Independiente Moralizador (FIM), a la Coordinadora Democrática (CODE), el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC), el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAAP), Solidaridad y Democracia (SODE) y el Movimiento Independiente Agrario (MIA). El Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), fue creado poco antes de las elecciones reuniendo a sectores moderados de las divididas izquierdas, que intentan reagrupar su movimiento en nuevo partido. Todos estos grupos, incluyendo al PPC, se definían como de oposición o independientes del gobierno. Sin embargo, varios de ellos se pasaron a las filas del oficialismo una vez electos.

El movimiento Renovación, integrado por expartidarios de Mario Vargas Llosa vinculados a organizaciones católicas tradicionalistas, respaldaba al gobierno.

También intervinieron otros 8 grupos que no obtuvieron los votos necesarios para ingresar al CCD.

6 Alberto Fujimori gusta de rodearse de personas de ascendencia oriental. Los japoneses y sus descendientes en el Perú son aproximadamente el 0.35% de la población. Yoshiyama fue designado luego Presidente del CCD, que inmediatamente dictó una ley estableciendo que el Presidente del CCD se convierte en vicepresidente de la República.

LOS RESULTADOS

Las elecciones favorecieron a la lista oficialista que obtuvo el 37.5% de los votos emitidos y el 49.3% de los votos válidos (descontando nulos y blancos). Ese resultado les permitió obtener más de la mitad de las curules (44 sobre 80). Sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas de Alberto Fujimori, que pensaba obtener 60 curules. El Presidente de facto sustentaba sus cálculos en el apoyo que dice tener en la población, reflejado en las encuestas que le otorgan entre 60% y 70% de aprobación. Los resultados demostraron, no obstante, que el respaldo que tiene no es tan alto y/o que no lo puede transmitir a otras personas.⁷ En cualquier caso, permitió una mayoría absoluta a Fujimori, que cuando lo necesitó, también contó con el respaldo de Renovación.

El PPC, que quedó en segundo lugar, obtuvo sólo el 7.4% de los votos válidos, la más baja votación de su historia electoral, sólo comparable con el 7.5% que logró en 1980. La táctica de participar no dio los resultados esperados por algunos de sus líderes.

El ausentismo de 27.8% es el más alto de las tres últimas décadas en elecciones generales, desde que se realizan elecciones relativamente libres y competitivas. De igual manera, el porcentaje votos nulos y blancos (23.9%) es el más elevado en ese período. Si bien los partidos que no participaron reclaman para sí el 19.8% de sufragios nulos (ellos dieron la consigna de viciar el voto), es probable que una parte de ese porcentaje se deba al rechazo espontáneo de la población. En conjunto, no votaron o lo hicieron nulo o en blanco el 45% de la población electoral, también un récord histórico.

APATÍA

La apatía de la población en este proceso —reflejado en la escasa participación electoral y en el desinterés durante la campaña—, se explicaría por un fenómeno más amplio y profundo, producto de la larga crisis que vive el país y los niveles de desintegración social y política a los que se ha llegado.

El respaldo que tiene Alberto Fujimori se debería, de un lado, a un ansia por orden en medio del caos generado por el terrorismo y la espantosa crisis económica, y de otro lado, a la falta de alternativas creíbles, dada la pérdida de confianza en los partidos políticos y las instituciones de la democracia.

7 La lista oficialista obtuvo 27.1% sobre el total de electores inscritos (incluyendo a los ausentes).

Pero el apoyo que tiene Fujimori no suscita entusiasmo y carece completamente de una estructura organizada.

El sistema de partidos preexistente está en escombros, pero no es reemplazado por otro.

Para los partidarios del gobierno la democracia quedó restablecida en el Perú con las elecciones al CCD, pero los opositores sostenían que el país seguía gobernado por un dictador y el equilibrio de poderes no se había restituido. Externamente, la OEA consideró legítimas las elecciones y cerró el caso del Perú, pero el gobierno de los EE.UU., manifestó a través de voceros autorizados del Departamento de Estado, que había que observar si el CCD era realmente un Congreso independiente, si la autonomía del Poder Judicial era restituida y si las violaciones a los derechos humanos disminuían, para poder considerar que se ha retornado a la democracia.

III. ELECCIONES MUNICIPALES: ENERO DE 1993

En las elecciones municipales, realizadas dos meses después de las del CCD, el panorama electoral cambió radicalmente. Ninguno de los partidos que ganaron el 22 de noviembre de 1992 tuvo resultados favorables el 29 de enero de 1993. El partido oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría ganó alrededor del 2.8% de circunscripciones en el país.⁸ En Lima, Fujimori retiró a su candidato cuando las encuestas indicaban que perdería largamente, y sólo ganó un municipio provincial, presentando candidatos en 5 de 190 provincias. (Tuesta 1994: 40).⁹ Los nuevos movimientos que aparecieron para las elecciones del CCD en 1992 no figuraron. Ninguno de ellos, incluyendo a Cambio 90-Nueva Mayoría, tienen una estructura nacional que le permitiera presentar candidatos en las 2,000 circunscripciones electorales. Ni siquiera en las 190 capitales provinciales o 25 departamentales.

A los llamados "partidos tradicionales", que cifraban sus expectativas en esta elección debido a que ellos sí cuentan con una estructura nacional,

8 Apoyo 1993.

9 En realidad, ese único triunfo del partido de gobierno, en la provincia sureña de Tacna, se debió a que un caudillo local, Tito Chocano, aceptó participar con los colores de Nueva Mayoría-Cambio 90. Antes, Chocano había ganado las municipales como miembro del PPC, al que renunció. Y después, en 1955, volvió a ganar, pero como independiente. A principios de 1996 encabezó una huelga regional contra el gobierno de Fujimori, protestando por dispositivos que perjudicaban a su provincia. Este ejemplo es una muestra de lo que es la política del Perú en la década del 90.

no les fue tan bien como esperaban. Obtuvieron, en conjunto, el 33% de los votos válidos (Tuesta 1994:135), ganando alrededor del 40% de los municipios. En Lima fue reelecto un independiente, con casi el 50% de los votos, dejando atrás a los partidos políticos.

La conclusión de este panorama es que la volatilidad e inestabilidad es muy alta. Como anota Luis Pásara "la nueva etapa expresa una ruptura importante de la sociedad peruana: aquella que divide a la élite de la base social. Porque el rechazo a los políticos forma parte de un repudio popular a los sectores tradicionalmente dirigentes del país (...) la opción electoral se ha vuelto errática e impredecible y tiende a degradar aún más el nivel de sus posibles beneficiarios." (1993:39)

Con esta experiencia, y persistiendo en su negativa a organizar un partido propio, Alberto Fujimori adoptó otra estrategia para controlar los gobiernos locales. Primero, fue disminuyendo las atribuciones de los municipios. Segundo, dictó un dispositivo, el decreto legislativo 776, del 31 de diciembre de 1993, que centraliza los fondos municipales para luego distribuirlos de una forma establecida por el gobierno. Así, recortó de un día para otro alrededor del 70% del presupuesto del Municipio de Lima, aumentando los ingresos de municipios pequeños. La finalidad política específica era hacer fracasar la gestión del Alcalde de Lima Ricardo Belmont, un independiente que después de su reelección en enero de 1993, reveló sus intenciones de candidatear a la presidencia de la República en 1995.

Fujimori tuvo éxito pues Belmont, inesperadamente privado de recursos, no pudo cumplir sus promesas electorales. La ciudad se llenó de basura que el municipio no podía recoger y los empleados municipales, a los que no se podía pagar sus salarios, hacían frecuentes huelgas y tomaban el local de la Alcaldía.

Belmont, que tenía una posición cercana al gobierno, que había avalado el golpe del 5 de abril de 1992 y que fue elogiado por Fujimori hasta antes de convertirse en un posible rival, se convirtió en un crítico radical del gobierno. Pero la situación caótica en la que cayó el Municipio lo arruinó políticamente.

Otro instrumento usado por Fujimori fue el Ministerio de la Presidencia, que de ser una pequeña dependencia administrativa se convirtió en un gigante que centralizó presupuestos de diversas instituciones públicas, dedicándose a construir obras en todo el país, muchas de las cuales antes ejecutaban los municipios, obras que infaliblemente inaugura Alberto Fujimori.

En suma, para suplir la falta de una organización política en las provincias, Fujimori ha centralizado los recursos estatales, restringido las competencias municipales y controlado el presupuesto de los gobiernos locales. De esta manera, los alcaldes tienen que apoyar al gobierno, so riesgo de que se les disminuya el presupuesto y/o el Ministerio de la Presidencia no realice obras en su distrito o provincia.

Los gobiernos y asambleas regionales, instituidos en la Constitución de 1979, estaban en proceso de formación. Eran parte del proceso de descentralización y deberían trasladar competencias del gobierno central a las 12 regiones que se crearon. Eran gobiernos elegidos. El golpe del 5 de abril acabó con los gobiernos regionales. A partir de esa fecha los presidentes de región fueron designados por el gobierno central, y prácticamente desaparecieron como instancias con poder efectivo. A pesar que la Constitución de 1993 también los incluye, no se ha hecho nada por ponerlos a funcionar.

IV. EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

El 31 de octubre de 1993 se realizó un referéndum convocado para aprobar la Constitución del CCD, que incluía como novedad la reelección presidencial inmediata. Alberto Fujimori lo convirtió explícitamente en un plebiscito sobre su gestión, calculando que de esa manera lograría una abrumadora votación a su favor, con lo cual pavimentaría el camino a su reelección. En esa perspectiva, organizó la campaña centrándose en los logros de su gobierno y no tanto en el contenido mismo de la Constitución.

La población le reconocía al gobierno –además del control de la inflación– el mérito de haber reducido drásticamente la violencia terrorista después de la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Ese fue entonces el tema central de la campaña gubernamental, que incluyó la exhibición, durante los seis meses previos a la votación, de decenas de subversivos vestidos con traje a rayas. La culminación consistió en la presentación, hecha personalmente por Fujimori, de dos cartas de Abimael Guzmán –que fue filmado leyéndolas– pidiendo negociaciones de paz y, prácticamente, respaldando al gobierno. Las cartas se presentaron a partir del 1 de octubre y para los estrategas del Servicio de Inteligencia Nacional, que son los que diseñan y ejecutan las campañas de Fujimori, deberían constituir el *rush* final que le daría una victoria abrumadora.

Pero en realidad este intento lo perjudicó, porque desde mediados de setiembre hasta el mismo día del plebiscito, Sendero Luminoso realizó varios atentados terroristas en Lima y el país. Fue la más importante ofensiva

desde la captura de Guzmán e incluyó actos espectaculares, como coches bomba en el centro de la capital. La discordancia entre la supuesta rendición de Guzmán y los hechos que vivía la población, pusieron en entredicho la credibilidad de Fujimori, pues se evidenció que SL no había sido liquidado completamente. Además, el trato que se le dio a Abimael Guzmán irritó a muchas personas. En sus presentaciones filmadas se le presentó con un uniforme verde oliva –ya no con traje a rayas–, y en compañía de su conviviente, Elena Iparraguirre, de quien se suponía estaba aislado. Fujimori relató en la TV que le había enviado a Iparraguirre una torta de regalo por su cumpleaños, y se refería a Guzmán como el “indiscutible jefe político de SL”, cuando la propaganda oficial anterior le negaba sistemáticamente la categoría de político, tildándolo de delincuente y criminal.

El segundo elemento de la campaña de Fujimori fueron los regalos que él, personalmente, efectuaba a los pobres del país. Recorrió el territorio inaugurando escuelas, repartiendo alimentos, computadoras y tractores.

Este estilo ha sido asumido por los nuevos políticos del entorno de Fujimori. Uno de ellos, entrevistado por Romeo Grompone y Carlos Mejía, lo dice desenfadadamente: “Nosotros vamos a la plaza, tenemos el Ejército... Vamos ¡formen cola!, ¡en orden, compadre!, ¡cola! No sé quien será, de qué partido. No nos interesa, pero basta que veas su condición humilde. ¡Cuádrense en fila! Y a todo el mundo sus cinco kilos de arroz a cada uno. Yo creo que esa es la mejor manera para poder ayudar a este programa de acción”. (Grompone y Mejía 1995:62).

La oposición coincidió en propiciar el NO a la Constitución, aunque no logró formar un sólo frente en ese propósito. No obstante que carecieron de publicidad en los medios de comunicación, desarrollaron una campaña bastante eficaz, sobre todo en las provincias, descontentas porque los aún débiles avances descentralizadores que se habían obtenido en la última década fueron liquidados con el golpe del 5 de abril, y quedaban postergados en la nueva Constitución. El *Sí* ganó ampliamente en Lima, lugar donde Fujimori concentró su campaña de inauguraciones y regalos, pero perdió en el resto del país.

Pero, quizás lo más importante, es que transcurridos 3 años desde el inicio del programa de ajuste económico, la población no veía muchos resultados, dado que, si bien la inflación seguía bajo control, los niveles de empleo y de ingresos para la gran mayoría seguían deprimidos.

Como dice Julio Cotler, “el estilo neopatrimonial de Fujimori es el talón de Aquiles del gobierno. Su extremo voluntarismo y rechazo a las media-

ciones institucionales impiden atender los intereses y demandas sociales que pueden desembocar en situaciones conflictivas." (1993:29)

Estas serían las explicaciones básicas de los magros resultados que obtuvo el gobierno en el plebiscito, donde triunfó el *SI* por 52% contra el 48% del *NO*, cuando Fujimori había reiterado poco antes que esperaba ganar por 70% contra 30%. La diferencia esperada de 40 puntos se redujo a una de 4. (Si se toma en cuenta el porcentaje sobre el total de electores, el resultado es 33% por el *SÍ*, 31% por el *NO*, 6% de nulos y blancos, y 30% de ausentes).

Adicionalmente, cabe señalar que las condiciones en que se planteó el plebiscito eran las mejores para el gobierno. Se votaba por la Constitución del CCD o nada, con lo cual el gobierno jugó con la idea que no aprobarla significaba el vacío y el caos. La tendencia que registraron las encuestas en las últimas semanas previas a la votación, mostraron un sostenido crecimiento del *NO* y caída del *SÍ*.

Por último, hay que señalar que, a diferencia de los procesos electorales realizados hasta 1990, este fue ensombrecido por acusaciones de irregularidades, incluyendo la denuncia de fraude realizada por un miembro del Jurado Nacional de Elecciones en su dictamen, que concluía proponiendo la nulidad de las elecciones.¹⁰ En efecto, siendo una votación sencilla, con sólo dos opciones, el JNE se demoró dos meses en proporcionar los resultados oficiales. Según algunos miembros de la oposición, es posible que se produjeran cambios de votos y actas electorales en el tránsito entre las mesas y los organismos electorales en provincias, tránsito que a veces demoraba varios días. El traslado y la custodia del material electoral estaba en manos de las fuerzas armadas. Estas presuntas irregularidades se habrían realizado aprovechando que no había un sistema de personeros de la oposición que cubriera la mayor parte de mesas electorales en el país.

V. ELECCIONES GENERALES: ABRIL DE 1995

El 9 de abril de 1995 se realizaron elecciones generales para elegir Presidente y Vicepresidentes de la República y un nuevo Parlamento. Alberto Fujimori, el presidente reeleccionista triunfó con un amplio 64.4% y obtuvo mayoría absoluta en el Congreso unicameral con un 52.1% de los votos válidos.

10 "Voto singular del Dr. Juan Chávez Molina", Diario El Peruano, p. 119430 a 119441, 11.12.93.

Aparentemente se trató del cuarto proceso electoral general consecutivo desarrollado normalmente, después de la restauración de la democracia en 1980. Pero en realidad el proceso se interrumpió el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori y las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado, a consecuencia del cual se modificaron sustancialmente las reglas del juego electoral.

En efecto, el Congreso Constituyente Democrático (CCD) electo en noviembre de 1992 para reemplazar al disuelto parlamento, y en el cual Fujimori tenía mayoría absoluta, modificó la Constitución estableciendo, entre otras cosas, que el Presidente de la República podía ser reelecto inmediatamente por un nuevo período de gobierno.

La reelección presidencial inmediata estaba prohibida en el Perú desde hacía más de seis décadas, a partir de la experiencia de la dictadura del presidente Augusto Leguía que gobernó 11 años. Leguía, un civil, fue electo democráticamente en 1919, pero dio un golpe de Estado, disolvió el Congreso en el que no tenía mayoría e hizo elegir otro. El nuevo Congreso modificó la Constitución, permitiendo la reelección inmediata por un período. Luego de hacerse reelegir, Leguía hizo modificar nuevamente la Constitución para posibilitar la reelección indefinida. Así, se hizo reelegir nuevamente, hasta que fue derrocado por un golpe militar en 1930. Después del "oncenio", las Constituciones de 1933 y 1979 prohibieron terminantemente la reelección presidencial inmediata. La reelección podía darse pasado un período.

Otra modificación importante contenida en la Constitución de 1993, en materia electoral, fue la supresión del Parlamento de dos cámaras y su reemplazo por un Congreso unicameral de 120 miembros elegidos en distrito nacional único. Antes la Cámara de Diputados (180 miembros), se elegía por departamentos, asignándose el número de diputados en función de la población de cada uno de los 25 departamentos. Y el senado, de 60 miembros, en distrito nacional. Este cambio a un congreso unicameral, extraño a la tradición parlamentaria peruana, y elección en distrito nacional único, obedece a los intereses políticos y electorales del gobierno: tener un Parlamento con poderes disminuidos frente al Ejecutivo, y evitar la elección en distritos electorales más pequeños, en los que Fujimori, que no tiene un partido organizado, carece de maquinaria electoral y de personal de confianza.

La Constitución de 1993 creó tres organismos electorales en reemplazo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los procesos electorales; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RNIEC), que tiene a su car-

go el padrón electoral; y el JNE, que queda como tribunal electoral. La creación de los dos nuevos organismos quedó en suspenso hasta después de las elecciones de abril de 1995, por falta de tiempo para organizarlos. El nuevo sistema entró en vigencia para las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1995.

Por último, se introdujo un artículo estableciendo que la mayoría absoluta de votos necesaria para ganar en primera vuelta se computa sobre los votos válidamente emitidos, es decir, sin contar los nulos y blancos, reduciendo de esa manera la barrera a superar, pues hasta 1990 se contaban también nulos y blancos.

NUEVA LEGISLACIÓN

Este cambio constitucional determinó también la modificación de las leyes electorales. El 22 de julio de 1994, el CCD aprobó una nueva ley electoral adaptada a la nueva Constitución. Curiosamente, al tiempo que eliminaba la prohibición del Presidente en ejercicio a candidatear, no sólo mantenía la prohibición para que sus parientes postulen a la presidencia o vicepresidencia de la República, sino que la ampliaba: tampoco podían ser candidatos al Congreso. Esta última limitación no había existido antes.

A principios de agosto de 1994 se conoció el motivo de esta extraña disposición cuando la esposa del Presidente, Susana Higuchi, protestó por ese dispositivo, que calificó de inconstitucional, porque limitaba sus derechos ciudadanos. A partir de allí se inició un debate público entre el presidente y su esposa, que concluyó con la separación. Susana Higuchi trató de postular, primero a la Presidencia y luego al Congreso, pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó sus intentos, aduciendo que no había cumplido con presentar el número de adherentes requerido, evitando así pronunciarse sobre el fondo del asunto, la constitucionalidad o no de la ley que le prohibía ser candidata. Higuchi realizó incluso una huelga de hambre en las puertas del JNE, pero no logró su propósito.

Otra modificación introducida por el oficialismo en la ley electoral, fue la prohibición a postular simultáneamente a la Presidencia y al Parlamento. Antes, eso estaba permitido y precisamente Alberto Fujimori, que candidateó al senado y la presidencia en 1990, se había beneficiado con ese dispositivo.

LIMITACIONES PRESIDENCIALES

Establecida la reelección inmediata, se planteó el problema de la posible utilización de los recursos del Estado por el presidente que postula a la

reelección. El JNE propuso al Congreso, en noviembre de 1994, un proyecto de ley cuyos principales puntos eran:

1. En los 90 días previos al acto del sufragio, el candidato presidente está prohibido de usar los medios de transporte y comunicación del Estado para hacer proselitismo político. Cuando use medios de transporte o comunicación del Estado, por razones de su función, se abstendrá de realizar proselitismo.

En esos 90 días, el candidato presidente no puede inaugurar o inspeccionar obras públicas, repartir bienes adquiridos con dinero del Estado, ni referirse en sus discursos oficiales—como presidente— a otros candidatos. Cuando actúa como candidato, tiene que pagar sus gastos de transporte, y no referirse a obras construidas con dinero del Estado.

2. Si el candidato presidente infringe la ley, el JNE le llamará la atención en privado la primera vez, lo amonestará públicamente la segunda, y le cancelará la inscripción como candidato la tercera.
3. Los partidos presentarán su presupuesto de gastos de campaña al JNE, así como sus fuentes de financiamiento. El incumplimiento o falseamiento de los datos motiva la cancelación de la inscripción.

El JNE sustentó esta propuesta con el argumento que buscaba hacer la competencia equilibrada, evitando las ventajas que podía tener el presidente candidato. Su proyecto de ley había tomado en cuenta la legislación de otros países en que existe la reelección presidencial inmediata.

En enero de 1995, la mayoría del CCD aprobó la ley con modificaciones sustanciales, lo que ocasionó la protesta pública del JNE. En síntesis, la ley aprobada por el CCD no incluía la prohibición al presidente a realizar inauguraciones e inspecciones de obras públicas en los 90 días previos a la elección, y no consideraba entre las sanciones posibles la cancelación de la inscripción, sino solamente amonestaciones y multas. La relación de gastos de los partidos deberían entregarse 60 días después de las elecciones, y no se prevén sanciones a los infractores. La ley así aprobada no permitía, según el JNE, “controlar y sancionar con la debida eficacia las infracciones que se produzcan el proceso electoral”.

LA CAMPAÑA

El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, lanzó su candidatura apoyado por un conglomerado de personalidades

independientes, de las tendencias más diversas, que formaron la Unión por el Perú (UPP). Así, su lista parlamentaria incluía a banqueros conservadores junto a líderes sindicales izquierdistas, a generales en retiro con fama de "duros", al lado de defensores de los derechos humanos. El Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), moderados de izquierda, fue el único grupo político que pudo integrar la UPP.

Los partidarios de Fujimori criticaron insistentemente a Pérez de Cuéllar porque estaba –según ellos– rodeado de "comunistas". Por tanto, decían, si llegaba al gobierno repetiría la política económica de Alan García, que condujo a la hiperinflación y el caos.

Aunque Pérez de Cuéllar rechazó esas críticas e hizo propuestas económicas liberales, la campaña de sus adversarios logró ponerlo a la defensiva, e influyó en su decisión de no incluir en su fórmula electoral, como candidato a la vicepresidencia, al izquierdista alcalde del Cusco, Daniel Estrada, que terminó encabezando la lista parlamentaria.

Según algunos observadores, uno de los principales problemas del ex Secretario de la ONU, fue su dificultad para establecer un diálogo fluido con la población. Aunque se cuidó mucho de no cometer los errores de Mario Vario Vargas Llosa en 1990 –que fue identificado con los "blancos" y "ricos"–, era muy difícil para Pérez de Cuéllar, diplomático durante 50 años, cambiar su lenguaje y sus modales distinguidos. Porque lo que hasta hace algunos años era una ventaja para un político en el Perú, hoy parece ser un serio obstáculo para quien aspire a un cargo electivo: Fujimori, que habla mal el castellano y es un orador deficiente, ha descubierto que eso es lo que prefieren las mayorías, que aparentemente identifican los discursos elaborados y la facilidad de palabra con los repudiados "políticos tradicionales". El hecho es que el discurso de Pérez de Cuéllar no resultó convincente para los ciudadanos, sobre todo de sectores populares.

Como dice Oscar Landi, "la gente no cree en las palabras. Sin embargo tiene que votar (...) Por eso el votante se posiciona frente a las palabras del político de un modo, digamos, oblicuo, combina lo que escucha con la búsqueda de indicios de veracidad y confiabilidad en los gestos y la conducta del candidato. (...) Lee indirectamente al político." (Landi 1995:213).

La propuesta económica de Pérez de Cuéllar no difería en esencia de lo que el gobierno había venido haciendo, aunque puso especial énfasis en el problema del empleo, punto débil de Fujimori, ofreciendo la creación de dos millones de puestos de trabajo en el período gubernamental de 5 años.

Asimismo, insistió en los programas de lucha contra la pobreza, en un país en que la mitad de la población está bajo la línea de pobreza.

En otro plano, Pérez de Cuéllar ofrecía un régimen democrático y el fortalecimiento de las instituciones.

El Alcalde de Lima, Ricardo Belmont (Movimiento Obras), realizó una campaña beligerante contra Fujimori. Belmont, electo como independiente y "antipolítico" en 1989 y reelecto en 1993 con el 45% de los votos, mantuvo cordiales relaciones con Fujimori, hasta que hizo pública su intención de postular a la presidencia. A partir de ese momento Fujimori lo consideró un enemigo y, como se ha dicho, le redujo en más dos tercios su presupuesto. Belmont no pudo cumplir entonces su plan de obras para la capital, los servicios se deterioraron y su popularidad se derrumbó.

Otro "independiente", Alejandro Toledo (Code - País Posible), tuvo un sorprendente repunte en las encuestas al inicio de la campaña. Toledo se ufanaba de haber salido de la extrema pobreza, de una familia campesina de la sierra, y de haber escalado posiciones con su esfuerzo, llegando a graduarse en importantes universidades norteamericanas. Aunque lo negaba, utilizó en su campaña el hecho de ser "cholo" (mestizo), del "color de la tierra", es decir, auténticamente peruano a diferencia de Fujimori. Recibió también el fuego graneado del oficialismo, que hurgó en su pasado y encontró vinculaciones no esclarecidas con una financiera informal que quebró, perjudicando a cientos de miles de ahorristas. La candidatura de Toledo, que tuvo una posición con el gobierno, se desinfló rápidamente.

Los partidos políticos "tradicionales" no pudieron remontar el descrédito que arrastraban desde la pasada elección y nominaron candidatos de "sacrificio", es decir, postulaciones más bien simbólicas. Todos ellos, sin embargo, confiaban en alcanzar porcentajes razonables, que fluctuaran entre el 10% y el 20% permitiéndoles obtener representaciones parlamentarias de cierta importancia.

El APRA, que había gobernado en el período 1985-90, realizó una campaña de duras críticas a Fujimori. Acción Popular (gobernó entre 1980-85), tuvo una campaña más moderada. Y el PCC (aliado de AP en el gobierno 1980-85) retiró a su candidata presidencial, manteniendo sólo la lista parlamentaria, ubicándose en una posición que algunos calificaron de "semi-fujimorista", tratando de captar votos cruzados: Fujimori a la presidencia, PPC en el Parlamento. En este terreno, competía con el Movimiento Renovación, grupo formado por disidentes del Movimiento Libertad de Vargas Llosa, que

participaron en las elecciones del CCD en 1992, y que apoyan a Fujimori.

EL CANDIDATO PRESIDENTE

Fujimori realizó una campaña peculiar. No hizo un solo mitín político, es decir, organizado por la alianza que lo postulaba, Cambio 90-Nueva Mayoría. Pero realizó, en su calidad de Presidente, cientos de inauguraciones e inspecciones en colegios, carreteras y otras obras públicas. Cada inauguración era en realidad un mitín, con un público cautivo –del barrio o la región–, al que funcionarios públicos y militares ayudaban a movilizar. Sus desplazamientos eran cubiertos profusamente por los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y tenían por tanto impacto nacional todos los días.

Así, Fujimori eludió la ley de control, y se movilizó en aviones y helicópteros de las FF.AA., cubriendo todo el país sin obstáculos.

Sus presentaciones como candidato eran solamente, según él mismo dijo, las que hacía en los programas de radio y TV que lo invitaban.

Aunque violó varias veces la deslucida ley de control, refiriéndose a sus adversarios electorales en sus presentaciones como presidente, no recibió ninguna sanción del JNE.

Hubo un elemento inesperado que interrumpió la campaña electoral. El 26 de enero estalló un conflicto armado con Ecuador en una agreste zona selvática del nororiente peruano. El enfrentamiento hizo que la campaña electoral se suspendiera casi totalmente –sin acuerdo previo– durante unas tres semanas. Y se mantuvo muy débilmente otras tres o cuatro semanas más, a tal punto que algunos candidatos pidieron que las elecciones se postergaran.

El hecho es que en ese período, prácticamente el único candidato que aparecía, en su condición de Presidente, era Fujimori, con la ventaja adicional que encarnaba a la Nación en un momento de conflicto externo.

Terminado el conflicto, Fujimori sostuvo que las armas peruanas habían triunfado. Sin embargo, varios observadores afirmaron que por primera vez el Perú había sido derrotado en un enfrentamiento armado con Ecuador (han sido varios en los últimos 170 años).

No obstante, eso tampoco afectó electoralmente a Fujimori que era un candidato "teflón", al que nada se le pega, a decir del politólogo Julio Cotler.

En muchas oportunidades, desde 1990, Alberto Fujimori ha faltado a la verdad de manera más o menos evidente. Al parecer, la gente se da cuenta de eso, pero –dependiendo de los temas– no le importa demasiado.

Fujimori usó en la campaña los dos grandes éxitos de su gobierno, la reducción de la inflación y la disminución del terrorismo, factores que han creado una sensación de orden y estabilidad que contrasta con el caos e imprevisibilidad reinantes en años anteriores. El crecimiento de la economía, pequeño en 1993 y muy importante en 1994 y 1995 también benefició a la población, a pesar de la desigual distribución del ingreso. El aumento de las rentas fiscales y los préstamos de organismos multilaterales permitieron, en los dos años previos a las elecciones, la construcción de numerosas obras públicas, sobre todo escuelas y carreteras, que han sido inauguradas casi siempre por el propio presidente Fujimori. De acuerdo a algunos críticos –de diversas tendencias– de la política económica del gobierno, hubo un crecimiento desmesurado y artificial, propiciado por el Estado, en el período a las elecciones.

Eso contribuyó a crear una situación de bonanza que favoreció al presidente reeleccionista y que generó grandes expectativas en la población, en el sentido que si Fujimori era reelegido la situación económica seguiría mejorando.¹¹ Por último, según algunos observadores, Fujimori usó al poderoso Servicio de Inteligencia Nacional y a las fuerzas armadas como aparato político, a falta de un partido propiamente dicho.

LAS ELECCIONES

A diferencia de los procesos electorales efectuados desde 1980, que no fueron cuestionados, el de 1995 se desarrolló en medio de la sospecha y de acusaciones de fraude. Esto se fundaba en las obvias intenciones reelec-

11 Sin embargo, pasadas las elecciones, a partir del segundo semestre de 1995, el gobierno ha tenido que empezar a "enfriar" la economía porque las consecuencias del alto crecimiento previo estaban creando problemas: aumento del déficit en la balanza de pagos y un ligero incremento de la inflación. El resultado ha sido que el PIB ha sido negativo desde fines de 1995 y el ministro de economía anunció en marzo de 1996 que seguiría así durante el primer semestre de 1996, reconociendo que difícilmente se alcanzarían las metas anuales previstas de inflación (un dígito) y de crecimiento del PIB (4.3%) para 1996. En febrero de 1996 la aprobación a Fujimori se derrumbó entre 9% y 13% según las empresas encuestadoras.

cionistas de Fujimori después del golpe de abril de 1992, de la publicación de un plan militar para gobernar durante 20 años, de la intervención de las fuerzas armadas en la campaña electoral –un general del ejército fue fotografiado mientras distribuía afiches de Fujimori–, y de la inescrupulosidad y poco respeto por las reglas del juego democráticas atribuidos al presidente y su entorno.

La legislación electoral favorable al presidente, aprobada por el oficialismo en el CCD, también fue denunciada como parte de ese intento manipulador. En este contexto se formó a mediados de 1994 la Asociación Transparencia, con la finalidad de organizar un sistema de observación independiente del proceso electoral y de promover la participación de la sociedad civil. Transparencia, integrada por ciudadanos independientes y de prestigio, usó la experiencia de organizaciones similares como Saká de Paraguay, Participa de Chile, Justicia y Paz de Panamá, Alianza Cívica de México, Poder Ciudadano de Argentina, Namfrel de Filipinas y Bafec de Bulgaria.

Transparencia logró reunir más de 9,000 voluntarios, en su mayoría jóvenes, que realizaron dos tareas en las elecciones: conteo rápido y observación electoral.

Las sospechas de la oposición parecieron confirmarse cuando se descubrieron, tres días antes de las elecciones, en el departamento de Huánuco, 3,000 actas de personas. Cada acta, puede contener hasta 200 votos. El local comercial donde se descubrieron las actas pertenece a un congresista de la alianza oficialista C90NM, Pablo Tello, que según se dijo, actuaba como jefe de la campaña en la región del también congresista oficialista Víctor Joy Way, vicepresidente del CCD.

Joy Way y el gobierno negaron su participación en el intento de fraude. Pero el descubrimiento de las actas robadas suscitó las enérgicas protestas de la oposición. Se creó una situación de confusión y rumores de que los principales candidatos opositores se retirarían de la contienda, cosa que finalmente no ocurrió.

A raíz de esa denuncia de fraude, algunos medios de comunicación vinculados a la oposición pusieron en duda la limpieza del proceso y se refirieron reiteradamente a la alteración de resultados que se preparaba para favorecer al candidato-Presidente.

El abrumador triunfo de éste, no pronosticado por las encuestas en tan alta proporción, ha llevado a varios analistas a sostener que esas denuncias

fueron –paradójicamente– contraproducentes para la oposición y favorables para el gobierno. “ Todo indica que la campaña del fraude produjo un aluvión de votos –hasta hacía poco indecisos– en favor de la lista de Cambio 90- Nueva Mayoría. La campaña del fraude era leída por los electores como una amenaza de nuevo caos si es que los denunciantes del fraude tenían fuerza suficiente en el nuevo Congreso (...). Con la prédica sobre el fraude, la oposición escribía el último capítulo de un manual para perder elecciones (Saldeco 1995:100).

No hay comprobación de esta tesis, pero es posible que algo de eso se haya producido. Es decir, que el cuestionamiento del proceso haya alimentado el miedo al caos en los electores inclinándolos a votar por el continuismo al que veían como una garantía de orden y estabilidad. Sin embargo, parece exagerado atribuir a ese hecho “ un aluvión de votos ” en favor del oficialismo, porque las denuncias de la oposición tuvieron una difusión muy limitada en el tiempo –dos o tres días–, y básicamente en Lima. Los grandes medios de comunicación, sobre todos los electrónicos no se hicieron eco de esa campaña.

LOS RESULTADOS

El amplio triunfo del candidato-presidente, 64.4% de los votos válidamente emitidos, evitó la necesidad de una segunda vuelta electoral. Su votación triplicó a la de Javier Pérez de Cuéllar, que obtuvo sólo 21.8%. Los partidos llamados “tradicionales” sufrieron una catástrofe peor que la de 1990. El APRA alcanzó 4.1%, Acción Popular 1.6% y la Izquierda Unida 0.6%. Con lo cual, además, fueron borrados del registro electoral por haber obtenido menos del 5% que exige la ley. Lo mismo le ocurrió al PPC, que sólo presentó lista parlamentaria y logró un magro 3.1%.

Inmediatamente después de conocidos los resultados oficiales de las elecciones, el CCD aprobó una ley (Nº26452 del 12 de mayo de 1995) modificando la ley electoral vigente, elevando sustancialmente el número de adherentes necesarios para inscribirse. Se pasó de los 100.000 que exigía el dispositivo anterior, al 4% del padrón electoral, aproximadamente 500,000 ciudadanos. Así, el *outsider* que se benefició del sistema electoral abierto y flexible con que gobernaron los partidos políticos hasta 1990, sistema que precisamente le permitió a él irrumpir con éxito en la escena política, se apresuró a cerrar todas las puertas después de consolidarse en el poder, con la obvia finalidad de reducir al mínimo las posibilidades que alguien desafíe su permanencia en el gobierno. Como consecuencia de este nuevo cambio de las reglas del juego, sólo quedaron con inscripción vigente las dos

agrupaciones que superaron el 5% en abril de 1995, Cambio 90-Nueva Mayoría y la UPP. Acción Popular, partido que sospechando lo que venía, había recogido firmas y se inscribió un día antes que se aprobara la nueva ley.

A los candidatos “independientes” no les fue mejor, Alejandro Toledo con un 32% y el Alcalde de Lima Ricardo Belmont con 2.6% quedaron debajo de las expectativas que ellos mismos se habían formado.

En la nueva votación para el Congreso se presentaron serios problemas. Más de tres millones trescientos mil votos fueron declarados nulos, el 40%, mientras que en la votación presidencial fueron nulos menos de ochocientos mil votos (el 8.7% de los válidamente emitidos). El número de votos emitidos para presidente y congreso fueron distintos en 835,371, algo teóricamente imposible pues se vota en una sola papeleta.

Lo que ocurrió, según el JNE, fue que en las actas de cada mesa de sufragio, los miembros de las mesas cometieron muchas veces el error —en el caso de la votación para el congreso— de sumar a los votos de los partidos los votos preferenciales. (Se puede votar por una lista y, opcionalmente, usar el voto preferencial por hasta dos candidatos dentro de esa lista. Los votos que se computan son los de la lista, y en un acta aparte, los preferenciales, que sirven para determinar el orden de la lista).

Según el JNE ese error se había cometido también en procesos anteriores, pero como el sistema no estaba computarizado, las actas se arreglaban informalmente en los jurados Provinciales, con la anuencia de los personeros de los partidos. Ahora, al ingresar las actas a la computadora, el programa rechazaba automáticamente las actas cuyas cifras no cuadraban, originándose esa enorme cantidad de votos nulos y la discordancia del número de votantes por lista presidencial y de congreso.

La oposición, sin embargo, vio en esto una maniobra gubernamental y denunció que se había cometido fraude en la votación para el congreso, con el objeto de dar al oficialismo mayoría parlamentaria absoluta. Algunos dijeron que los errores en el conteo fueron inducidos adrede por el JNE. Las acusaciones de fraude se redoblaron cuando medios de prensa divulgaron, después de los comicios, que había un faltante de 37,000 actas electorales en los depósitos del JNE. No se llegó a esclarecer si esas actas habían sido robadas o si nunca ingresaron al JNE.

Aunque no cabe duda que hubo graves errores en el conteo de los votos para el congreso, no se llegó a demostrar ningún caso específico de fraude

electoral, salvo el intento de Huánuco, y el de un candidato al congreso del oficialismo que alteró el voto preferencial de las actas en el departamento de Puno.

El conteo rápido efectuado por Transparencia arrojó resultados casi idénticos a los del JNE. En la votación para presidente, las diferencias nunca superaron el 0.2% para los diez primeros candidatos. Y en la votación para el congreso no fueron más del 0.4% (salvo un caso en que fue del 0.8%). Cabe anotar que el programa de cómputo de Transparencia no eliminó las actas donde el número de votos excedía el de votantes (por el error mencionado de sumar los votos preferenciales a los de partido). A pesar de lo cual, sus resultados fueron muy similares a los del JNE. (Transparencia 1995).

La oposición ha usado el argumento que la mayoría absoluta obtenida por el oficialismo -67 bancas de 120-, las ha ganado con sólo el 18.3% del padrón electoral.

En suma, es un hecho que hubo intentos de alterar los resultados y que hubo graves problemas en el conteo de los votos para el Congreso, pero no se ha demostrado que hubiera un fraude que pudiera modificar los resultados. Es posible que haya habido alguna manipulación de votos preferenciales (que altera el orden dentro de una lista, pero no el número de bancas que corresponde a la lista).

Políticamente se ha favorecido un gobierno autoritario que concentra el poder en el Presidente de la República y sus aliados militares, y que tiene al frente una oposición débil y poco organizada.

Como dice Julio Cotler, "una coalición de poder centrada personalmente en Fujimori, cuyo margen de hegemonía no tiene precedentes en la historia del país, logró atacar y resolver de manera eficaz, mediante métodos tecnocráticos y autoritarios, los problemas que afrontaba el Perú. () Sin embargo, la continuidad del autoritarismo fujimorista está sembrada de dudas. En efecto, el régimen tiene dificultades para consolidarse políticamente (...).

Dichas dificultades provienen, básicamente, de la falta de mecanismos institucionales para canalizar las demandas sociales y la participación política, que permitan distribuir equitativamente los beneficios de la recuperación económica. El carácter tecnocrático y autoritario de las decisiones gubernamentales -vale decir el rechazo a la participación y a la consideración de los intereses sociales- son determinantes para que los éxitos obteni-

dos por el régimen no se reflejen ni en la recuperación de las condiciones de vida del resto, sino que, por el contrario, se expresan en una mayor concentración de la riqueza y en el crecimiento de los índices de desigualdad social, lo que crea situaciones dramáticas y condiciones explosivas." (Cotler 1994:222).

VI. LAS MUNICIPALES DE 1995

El 12 de noviembre de 1995 se efectuaron elecciones municipales en todo el país. Esta vez, el fenómeno advertido en las anteriores municipales se hizo más pronunciado: los que habían triunfado en los comicios efectuados apenas siete meses atrás, en abril de 1995, o no participaron o fueron derrotados.

En Lima ganó con 52% el independiente Alberto Andrade, derrotando al candidato oficialista Jaime Yoshiyama, de Cambio 90-Nueva Mayoría, que obtuvo 48%.

NUEVOS INDEPENDIENTES

La UPP, que había quedado en segundo lugar en las elecciones generales, decidió no presentar candidatos, no sólo porque no tenía organización nacional, sino porque las diferencias internas en el heterogéneo conglomerado probablemente lo hubieran hecho estallar si lo intentaba. Los partidos habían sido borrados del padrón –salvo Acción Popular– y sólo pudieron inscribir algunos candidatos locales como independientes. El resto de listas electorales con representación en el congreso ni lo intentó.

El oficialismo, que había arrasado en las presidenciales de abril sólo presentó candidatos en la provincia de Lima, la capital, y el vecino puerto del Callao. En Lima llevó a Jaime Yoshiyama Tanaka, ex ministro y ex presidente del Congreso Constituyente, y en el Callao a Kurt Woll, un ex miembro del PPC pasado a filas del gobierno, y que iba por la reelección. Los motivos por los que Nueva Mayoría Cambio 90 no presentó candidatos en el resto de las 2,000 provincias y distritos son, como se ha dicho, porque no tienen ni les interesa construir un aparato partidario, y porque han adoptado el método de ganar la adhesión de los alcaldes manipulando los fondos que se transfieren a los gobiernos locales y las nuevas inversiones estatales que se hacen en las provincias.

Pero Alberto Fujimori tenía un importante motivo para presentar un candidato oficialista en Lima y era impedir el triunfo de Alberto Andrade,

un independiente (ex-PPC), que se había desempeñado como eficiente alcalde del mesocrático distrito de Miraflores durante varios períodos. Si Andrade ganaba la alcaldía de Lima, se podía perfilar como candidato presidencial en el 2,000, disputándole la elección a Fujimori.

Alberto Andrade no era un adversario del gobierno. No estuvo entre quienes se opusieron al golpe del 5 de abril de 1992 y en más de una ocasión expresó su respaldo a Fujimori. Incluso intentó convertirse en el candidato oficialista en las elecciones municipales de 1995, según revelaron algunos miembros del gobierno durante la campaña. El problema para el presidente recién reelecto, pero que ya estaba mirando hacia los próximos comicios presidenciales, era la posibilidad que Andrade ambicionara su lugar.

Andrade se definió como un "no político" y organizó su movimiento "Somos Lima" reclutando a independientes y a ex militantes de partidos de izquierda y derecha moderada. Su estrategia electoral consistió en presentarse como un "técnico", con planes y proyectos para mejorar Lima, cosa que podría hacer -decía- gracias a su amplia y exitosa experiencia municipal. En realidad, se manejó como hábil político que ganó los votos de la oposición al gobierno y de una importante franja del electorado que había votado antes por Fujimori, pero que estaba descontenta con su nueva gestión y/o que se negaba a darle más poder. La idea es que Fujimori no sólo era presidente y tenía mayoría absoluta en el congreso, sino que también quería ser Alcalde de Lima a través de Yoshiyama, identificado como un allegado muy cercano, y, además, de origen japonés. Aunque ésto no apareció abiertamente en la campaña, fue un factor que estuvo presente en ella, sobre todo en los estratos altos, medios y medio-bajos: "hay muchos 'chinos' en el gobierno", es la frase que graficaba ese sentimiento, aludiendo a la sobrerrepresentación de personas de origen asiático.

"Con todo el apoyo" fue el tema de campaña de Jaime Yoshiyama, en obvia referencia al respaldo gubernamental que recibiría en caso de triunfar. De esa manera se pensaba atraer el voto "pragmático". La idea era que si los ciudadanos votaban por el candidato oficialista, Lima recibiría dinero. De lo contrario, se repetiría el trato que se dio al Alcalde Ricardo Belmont, al que se le recortó la mayor parte del presupuesto como represalia política al transformarse en un opositor.

Pero el argumento -o "chantaje", como lo calificó un congresista que apoya al gobierno-, no funcionó, y la mayoría decidió votar por un candidato con el que se corría el riesgo de repetir la asfixia económica de la capital.

Cuando faltaban pocas semanas para la elección, las encuestas daban como ganador a Andrade con una ventaja de 10% a 15%. El gobierno entonces reforzó su intervención en la campaña. Alberto Fujimori recorrió diariamente los distritos más populosos —y pobres— de Lima acompañado de Yoshiyama, repartiendo comida, cocinas para comedores populares y toda clase de regalos, así como inaugurando obras. El ejército movilizó tropa y maquinaria pesada para limpiar las enormes acumulaciones de basura que los municipios no pueden recoger por falta de presupuesto. Se hizo correr la versión que si el oficialismo triunfaba los regalos continuarían, de lo contrario cesarían de inmediato. De esta manera, Yoshiyama logró recuperar terreno en varios distritos populares. Los de clase media y clase media baja, sin embargo, donde el gobierno no hacía —ni podía hacer— ese tipo de campaña, se mantuvieron con Andrade y finalmente inclinaron la balanza a su favor. Porque si bien el oficialismo ganó en 19 de los 42 distritos que tiene Lima, lo hizo por márgenes muy apretados, y en otros 19 distritos se impuso ampliamente Andrade.

El resultado final en Lima fue de 1'495,533 de votos por Andrade (52%) contra 1'376,771 de Yoshiyama (48%), 180,575 (5.77%) votos en blanco y 74,943 (2.43%) nulos.

En el puerto del Callao, vecino de Lima, el triunfo del independiente Alex Kouri (ex-PPC) sobre el candidato oficialista fue más amplio aún: 57.9% contra 36.8%.

El resultado de las elecciones se interpretó como un llamado de atención al gobierno, aunque no como un rechazo a su política.

Fundamentalmente, se trataría de limitar lo que algunos consideran un exceso de poder de Fujimori y de recordarle que debería cumplir con sus promesas electorales. En efecto, las expectativas de la población eran que después de la reelección vendría la abundancia, concretamente, más empleo y mayores ingresos. Estas expectativas fueron alentadas por el gobierno y sus partidos durante la campaña electoral. La idea era muy simple: los 5 primeros años fueron de "limpieza" de los obstáculos, la eliminación de la inflación y el terrorismo. Para eso las mayorías tuvieron que ajustarse. En el segundo período de Fujimori se cosecharían los frutos del ajuste y vendría la prosperidad sostenida. De hecho, la economía creció significativamente, sobre todo el segundo semestre de 1994 y el primero de 1995. Esa era una base real sobre la cual se sembraron las expectativas de una pronta mejoría. Pero pasadas las elecciones, durante el segundo semestre de 1995, el crecimiento se frenó bruscamente y la producción empezó a caer. Al parecer, esta

situación puede haber influido en la derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre.

El domingo 12 de noviembre, pocas horas después de conocerse los resultados extraoficiales de la elección, Fujimori anunció en un programa de TV que nombraba al derrotado Jaime Yoshiyama como ministro de la Presidencia. Este Ministerio concentra alrededor del 25% del presupuesto nacional y ha absorbido parte de las funciones de los municipios. Pocos días después, Yoshiyama se hizo cargo del nuevo puesto. Así, según algunos analistas, el candidato vencido en las urnas se transformó en un "super-alcalde", antes incluso que el victorioso Andrade ocupara el sillón municipal. El gesto de Fujimori fue considerado como de poco respeto por la decisión popular.

Un elemento significativo que merece la pena destacarse, es que incluido el proceso electoral, ninguno de los alcaldes triunfadores aceptaba ser de oposición y todos negaban enfáticamente cualquier posibilidad de postular a la presidencia en el año 2,000. Es más o menos obvio que existe un difundido temor a ser objeto de represalias de parte del gobierno si es que se revela una opinión disidente y, sobre todo, si se manifiesta la aspiración -normal en cualquier democracia- a postular a la presidencia.

BIBLIOGRAFÍA

APOYO S.A.

1993 **Resultados de las elecciones municipales. Informe de Opinión.** Febrero.

COTLER, Julio

1993 **Descomposición política y autoritarismo en el Perú.** Documento de Trabajo N° 51.IEP.

1994 **Política y sociedad en el Perú. Cambios y continuidades.** IEP.

GROMPONE, Romeo y Carlos MEJIA

1995 **Nuevos Tiempos, Nueva Política. El fin de un ciclo partidario.** IEP.

LANDI, Oscar

1995 *Outsiders, nuevos caudillos y media politics*

En : Carina Perelli, Sonia Picado S., Daniel Zovatto (compiladores)
Partidos Políticos y Clase Política en América Latina en los 90.
IIDH-CAPEL, San José.

PASARA, Luis

1993 "El Ocaso de los Partidos". En: Augusto Álvarez (Editor), **El Poder en el Perú**. Editorial Apoyo.

SALCEDO, José María

1995 **Terremoto. ¿Por qué ganó Fujimori?** Editorial Brasa, Lima, 1995.

TRANSPARENCIA

1995 **Informe del conteo rápido y la observación electoral de las elecciones generales de 1995**. Fundación Hanns Seidel. Lima, 1995.

TUESTA SOLDEVILLA, Fernando

1994 **Perú Político en Cifras**. Fundación Friedrich Ebert. Lima.

CUADRO N° 1
PERÚ: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL CONGRESO
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO 22 DE NOVIEMBRE DE 1992

Partido	Votos	Porcentaje sobre votos válidamente emitidos	Porcentaje sobre votación total	Porcentaje sobre total de electores	Número de representantes
Nueva Mayoría-Cambio 90	3075422	49.3%	37.5%	27.1%	44
Partido Popular Cristiano	605651	9.7%	7.4%	5.3%	8
Partido Independiente Moralizador	486984	7.3%	5.9%	4.3%	7
Renovación	349314	7.1%	5.4%	3.9%	6
Movimiento Democrático de Izquierda	341646	5.5%	4.2%	3.9%	4
Coordinadora Democrática	329153	5.3%	4.0%	2.9%	4
Frente Nacional de Trabajadores y C.	237977	3.8%	2.9%	2.1%	3
Frente Popular Agrícola del Perú	172923	2.8%	2.1%	1.5%	2
Partido Solidaridad y Democracia	126822	2.0%	1.5%	1.1%	1
Movimiento Independiente Agrario	107543	1.7%	1.3%	0.9%	1
Otros (8 grupos)	313247	5.0%	3.8%	2.8%	0
TOTAL VÁLIDAMENTE EMITIDOS	6237682	100.0%	76.1%	55.0%	80
Blancos	333277		4.1%	2.9%	
Nulos	1620887		19.8%	14.3%	
TOTAL VOTANTES	8191846		100.0%		
AUSENTES	3151363			27.8%	
TOTAL INSCRITOS	11343209			100.0%	

Fuente: JNE

CUADRO N° 2

PERÚ: ELECCIONES MUNICIPALES DEL 29 DE ENERO DE 1993

Partido	Votos	Porcentaje sobre votos válidamente emitidos	Porcentaje sobre votación total	Porcentaje sobre total de electores
Acción Popular	675826	12.3%	9.2%	6.0%
Partido Aprista	639485	11.7%	8.7%	5.74%
Partido Popular Cristiano	290154	5.3%	4.0%	2.9%
Izquierda Unida	220188	4.0%	3.0%	2.0%
Frete Nacional de T. y C.	178813	3.3%	2.4%	1.6%
Movimiento Democrático de Izquierda	26387	0.5%	0.4%	0.2%
Listas Independientes Ganadoras	1400641	25.6%	19.1%	12.5%
Otros	2048260	37.4%	28.0%	18.2%
TOTAL VÁLIDAMENTE EMITIDOS	5479754	100.0%		48.7%
Blancos	399295		5.5%	3.6%
Nulos	1443127		19.7%	12.8%
TOTAL VOTANTES	7322176		100.0%	
AUSENTES	3923287			34.9%
TOTAL INSCRITOS	11245463			100.0%

Fuente: Tuesta 1994

**CUADRO N° 3
PERÚ: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 9 DE ABRIL DE 1995
VOTACIÓN PARA EL CONGRESO**

Partido	Absolutos	Porcentaje sobre votos válidamente emitidos	Porcentaje sobre votación total	Porcentaje sobre total de electores	Número de Representantes
Cambio 90 - Nueva Mayoría	2277423	62.10%	17.67%	18.34%	67
Unión por el Perú	511804	14.00%	7.43%	1.93%	17
Partido Aprista Peruano	285526	6.53%	3.47%	2.30"	9
Frente Independiente Moralizador	213777	4.89%	2.50%	1.72%	5
Code-Pais Posible	181397	4.15%	2.20%	1.46%	5
Acción Popular	146018	3.34%	1.77%	1.19%	4
Partido Popular Cristiano	135236	3.09%	1.64%	1.09%	3
Renovación	170060	2.98%	1.58%	1.05%	3
Movimiento Cívico Obras	87252	2.00%	1.06%	0.70%	2
Frente Popular Agrícola	46990	2.00%	1.06%	0.70%	2
Perú al 2000-FNTC	46728	1.07%	0.57%	0.38%	1
Movimiento Independiente Agrario	34463	0.79%	0.42%	0.28%	1
M. Independiente Nuevo Perú	29557	0.68%	0.56%	0.24%	1
Partido Reformista de Perú	113102	0.30%	1.16%	0.11%	1
Alternativa Perú Puma	12391	0.28%	0.15%	0.10%	9
Apertura para el Desarrollo	10752	0.25%	0.10%	0.09%	5
Frente Independiente de RN	10314	0.24%	0.13%	0.08%	3
Movimiento Independiente Inca	9599	0.22%	0.12%	0.08%	3
Movimiento Social Independiente	6588	0.15%	0.08%	0.05%	1
VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS	4371037	100.00%	50.11%	35.19%	120
VOTOS NULOS	3356435		40.78%	27.02%	
VOTOS BLANCOS	502774		6.11%	4.05%	
TOTAL VOTANTES	8220246		100.00%		
AUSENTES	1190918			33.74%	
ELECTORES HÁBILES	12421164			100.00%	

NOTA: La diferencia del total de votos para presidente y congreso se explica por los errores en el conteo efectuado en las mesas.

CUADRO N° 4

PERÚ: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 9 DE ABRIL DE 1993
VOTACIÓN PRESIDENCIAL

Partidos	Absolutos	Porcentaje sobre votos válidamente emitidos	Porcentaje sobre votación total	Porcentaje sobre total de electores
Cambio 90 - Nueva Mayoría	4798515	84.42%	52.93%	36.63%
Unión por el Perú	1624566	21.81%	17.92%	13.08%
Code-País Posible	241595	3.24%	2.66%	1.95%
Movimiento Cívico Obras	192261	2.58%	2.12%	1.55%
Acción Popular	122383	1.64%	1.35%	0.99%
Frente Popular Agrícola	57556	0.77%	0.63%	0.46%
Izquierda Unida	42686	0.57%	0.47%	0.34%
Perú al 2000-FNTE	25014	0.34%	0.28%	0.20%
M. Independiente Nuevo Perú	9999	0.13%	0.11%	0.08%
Partido Reformista del Perú	9105	0.12%	0.10%	0.07%
Alternativa Perú Puma	7006	0.09%	0.08%	0.06%
Paz y Desarrollo	6337	0.09%	0.07%	0.05%
Frente Independiente de RN	5249	0.07%	0.06%	0.04%
VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS	7448386	100.0%		59.87%
VOTOS NULOS	786742		8.68%	6.33%
VOTOS BLANCOS	830489		9.16%	6.69%
TOTAL VOTANTES	9065617		100.00%	72.99%
AUSENTE	3355547			27.01%
ELECTORES HÁBILES	12421164			100.00%

Fuente: JNE

CUADRO N° 5

PERÚ: REFERÉNDUM OCTUBRE 31, 1993

Opción	Votos	Porcentaje sobre votos válida- mente emitidos	Porcentaje sobre votación total	Porcentaje sobre total de electores
SÍ	3895763	52.33%	47.63%	33.52%
NO	3548334	47.67%	43.38%	30.53%
Votos válidos	7444097	100.00%	91.02%	64.06%
Votos nulos	518749	-	6.34%	4.46%
Votos blancos	3442078	-	2.64%	1.88%
Votos emitidos	8178742	-	100.00%	70.38%
Ausentes	3442078	-	-	29.62%
Inscritos	11620820	-	-	100.00%

Fuente: Tuesta 1994